

REVISTA DE DERECHO

AÑO XXVI — OCTUBRE - DICIEMBRE DE 1958 — N.º 106

DIRECTOR: ORLANDO TAPIA SUAREZ

Quintiliano Monsalve Jara

ABOGADO

CONSEJO CONSULTIVO:

HUMBERTO ENRIQUEZ FRODDEN

ALEJANDRO VARELA SANTA MARIA

JUAN BIANCHI BIANCHI

QUINTILIANO MONSALVE JARA

MARIO CERDA MEDINA

ESTEBAN ITURRA PACHECO

CORTE DE APELACIONES DE CONCEPCION

DARIO PULGAR ARRIAGADA Y OTRO

CON MARIO ALMENDRAS MERINO Y OTROS

NULIDAD DE TESTAMENTO

Apelación de incidente

ACTOS JUDICIALES — DILIGENCIAS JUDICIALES — ACTUACIONES JUDICIALES — ACTOS DE PROCEDIMIENTO — EFICACIA DE LOS ACTOS DE PROCEDIMIENTO — NULIDAD — NULIDAD PROCESAL — DECLARACION DE LA NULIDAD PROCESAL — PETICION DE PARTE — PASIVIDAD DE LOS TRIBUNALES — DECLARACION DE OFICIO DE LA NULIDAD PROCESAL — LEY N.º 7.760 — ARTICULO 84 DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL — OMISION DE REQUISITOS SEÑALADOS POR LA LEY — LITIS — NORMAS PROCESALES — NORMAS PROCESALES DE DERECHO PUBLICO — INTERES PUBLICO — TRAMITES Y ACTUACIONES PROCESALES DE DERECHO PRIVADO — INTERES PARTICULAR DE LOS LITIGANTES — TRAMITES ESENCIALES — EMPLAZAMIENTO — CAPACIDAD DE LAS PARTES — COMPETENCIA DEL TRIBUNAL — COMPETENCIA ABSOLUTA.

DOCTRINA.—El espíritu del legislador, al agregar —por medio de la Ley N.º 7.760— el inciso final del artículo 84 del Código de Procedimiento Civil, fue no sólo el de proporcionar a los

Tribunales, en forma expresa, la facultad para declarar de oficio la nulidad procesal, desvaneciendo todas las dudas que sobre el particular existían antes de la dictación de dicha ley, sino que,

además, el de conferirles la suficiente autoridad para evitar que esa nulidad se produzca.

La citada facultad, que está destinada a restar eficacia a aquellos actos, diligencias o actuaciones en cuya ejecución se han emitido ciertos requisitos señalados por la ley, importa una excepción más a la regla de la pasividad de los Tribunales que consigna el artículo 10 del Código Orgánico de Tribunales, conforme a la cual, éstos no pueden ejercitar su ministerio sino que a petición de parte y salvo los casos en que la ley les concede atribución para proceder de oficio.

Si bien es un principio inconcusso que las normas fundamentales que rigen la litis son parte integrante del Derecho Público, es lo cierto que no puede desconocerse que muchas actuaciones y trámites procesales pertenecen a la órbita del Derecho Privado, porque sólo tienen atinencia y afectan al interés individual o particular de las partes contendientes y, por lo mismo, pueden ser renunciados por el litigante en cuyo beneficio se han considerado.

La declaración oficiosa de la nulidad procesal sólo procede respecto de determinadas actuaciones que tienen una finalidad de orden público o cuando en ellas

se encuentra comprometido un interés público, como lo son los trámites esenciales o presupuestos básicos del proceso, tales como el emplazamiento, la capacidad de las partes y la competencia absoluta del tribunal que debe conocer de la causa.

En cambio, los otros actos del proceso, que son de orden privado, quedan al margen o fuera de la actividad oficiosa del Juez y su ineficacia sólo puede ser declarada a solicitud de parte y en la oportunidad que la ley señala, ya que el hecho de hacer tal declaración de oficio transformaría a los Jueces en cauteladores del uso que las partes mismas hagan de cada trámite legal que atañe a su propia defensa, lo que no puede aceptarse, por razones obvias.

Si las partes litigantes no evacúan oportunamente gestiones o trámites que solamente afectan a su defensa, o las cumplen de una manera indebida o incorrecta, los vicios que de ello se originen menoscabarán exclusivamente a quienes no usaron su derecho en los términos exigidos por la ley, y su ineficacia en ningún caso podría obtenerse mediante la función correccional del Tribunal, a que se refiere el inciso final del artículo 84 del Código de Procedimiento Civil.

NULIDAD DE TESTAMENTO

491

Sentencia de Primera Instancia

Los Angeles, veintiuno de Julio de mil novecientos cincuenta y ocho.

Vistos y teniendo presente:

Que se duplicó en la reconven-
ción y se solicitó por la parte de-
mandante, en el primer otrosí del
crito de fojas 141, que se reci-
era la causa a prueba, en cir-
cunstancias de que los demanda-
dos Carmela Salazar Morales y
Miguel Almendras Pulgar, repre-
sentada por su marido Oscar Díaz
Parra, no habían evacuado la dú-
plica ni se había dado por eva-
cuado dicho trámite en rebeldía.

De conformidad con lo dispues-
to en el inciso 3.º del artículo 84
del Código de Procedimiento Ci-
vil, se corrige el procedimiento, de
manera que se dejan sin efecto to-
das las actuaciones practicadas
desde la mencionada dúplica a la
convención y se repone la cau-
sal al estado de que las partes de-
mandadas constituidas por doña
Carmela Salazar Morales y doña
Miguel Almendras Pulgar, repre-
sentada por su marido don Oscar
Díaz Parra, quedan en condicio-
nes de duplicar en la causa prin-

cipal o de que sea evacuado di-
cho trámite en rebeldía.

M. Fuentes Hurtado.

Pronunciada por el señor Juez
de Letras titular del Segundo Juz-
gado, don Martín Fuentes Hur-
tado. — Guillermo Herrera Na-
varrete, Secretario.

Sentencia de Segunda Instancia

Concepción, veintiocho de Oc-
tubre de mil novecientos cincuen-
ta y ocho.

Vistos:

1.º) Que el espíritu del legisla-
dor, al agregar en la Ley N.º 7760
el inciso final del artículo 84 del
Código de Procedimiento Civil,
fue no sólo el de proporcionar a
los Tribunales en forma expresa
la facultad para declarar la nuli-
dad procesal de oficio, desvane-
ciendo todas las dudas que sobre
el particular existían, sino que,
además, el de conferirles la sufi-
ciente autoridad para evitar que
ella se produzca;

2.º) Que la citada facultad, que está destinada a restar eficacia a aquellos actos, diligencias o actuaciones en cuya ejecución se han omitido ciertos requisitos señalados por la ley, importa una excepción más a la regla de la pasividad de los Tribunales, que consigna el artículo 10 del Código Orgánico de los Tribunales, conforme a la cual éstos no pueden ejercitar su ministerio, sino que a impetración de parte, salvo los casos en que la ley les concede la atribución para proceder de oficio;

3.º) Que, dada la trascendencia e importancia de esta institución jurídica, conviene precisar y determinar su amplitud y extensión, pues, como se verá más adelante, esta facultad conferida a los tribunales no es aplicable a todo acto o trámite del juicio;

4.º) Que, si bien es un principio inconcusso que las normas fundamentales que rigen la litis son parte integrante del Derecho Público, es lo cierto que no puede desconocerse que muchas actuaciones y trámites procesales pertenecen a la órbita del Derecho Privado, porque sólo tienen atención y afectan al interés individual o particular de las partes contendientes y, por lo mismo,

pueden ser renunciados por el litigante en cuyo beneficio se han considerado;

5.º) Que la declaración oficiosa de la nulidad procesal sólo procede respecto de determinadas actuaciones que tienen una finalidad de orden público o cuando en ellas se encuentra comprometido un interés público, como lo son los trámites esenciales o presupuestos básicos del proceso, tales como el emplazamiento, la capacidad de las partes y la competencia absoluta del tribunal que debe conocer de la causa. En cambio, los otros actos del proceso que son de orden privado quedan al margen o fuera de la actividad oficiosa del Juez. Su ineficacia sólo puede ser declarada a solicitud de parte y en la oportunidad que la ley le señala;

6.º) Que, por consiguiente, el ejercicio de esta facultad excepcional no puede hacerse efectiva en actos, actuaciones o trámites que sólo miran al interés privado. La infracción a este principio transformaría a los Jueces en cauteladores del uso que las partes mismas hagan de cada trámite legal que atañe a su propia defensa, lo que no puede aceptarse por razones obvias;

NULIDAD DE TESTAMENTO

493

7.º) Que si las partes litigantes no evacuan oportunamente gestiones o trámites que sólo afectan a su defensa o las cumplen de una manera indebida o incorrecta, los vicios que de ello se originen menoscabarán exclusivamente a quienes no usaron su derecho en los términos exigidos por la ley, y su ineficacia en ningún caso podría obtenerse mediante la función correctiva del tribunal a que se refiere el citado inciso final del artículo 84 del Código de Procedimiento Civil;

8.º) Que en la especie los legatarios demandados doña Carmela Salazar y doña Raquel Almendras, representada esta última por su marido don Oscar Díaz Parra, no evacuaron en su oportunidad el trámite de la duplica, como tampoco la contestación de la demanda, estando debidamente notificados, continuando el juicio su curso progresivo, no obstante que no se les acusó la correspondiente rebeldía. Las omisiones en que incurrieron los mencionados demandados sólo miran a su interés privado y afectan exclusivamente a su derecho de defensa y sólo ellos pudieron reclamarlo en la debida oportunidad. Estos vicios en ningún caso afectan a la formación

de la relación procesal válida. Resulta, entonces, obvio concluir que respecto de ellos el tribunal no ha podido ejercer la prerrogativa que le concede la norma legal en estudio;

9.º) Que, por lo demás, los vicios en que los mencionados litigantes incurrieron han sido saneados con la expresa renuncia de la nulidad procesal que formulan en su escrito de fojas 201 y en el que también hacen explícita manifestación en orden a la aceptación de la demanda que en contra de ellos han dirigido los actores don Darío Pulgar y don Ramón Domínguez Benavente.

Se revoca la resolución apelada de veintiuno de Julio último, escrita a fojas 197, y se resuelve que no ha lugar a corregir el procedimiento ni a reponer la causa al estado que se señala en dicha resolución.

Devuélvase.

Agréguese el impuesto antes de notificar.

Publíquese.

Redacción del Ministro suplente don Víctor Hernández Riosco.

R. de Goyeneche P. — Guillermo Novoa J. — Víctor Hernández R. — T. Chávez Ch.

Dictada por los señores Presidente de la Ilustrísima Corte, don

Raúl de Goyeneche Petit, Ministro en propiedad, don Guillermo Novoa Justrow y Ministros suplentes, don Víctor Hernández Rioseco y don Tomás Chávez Chávez. — Abraham Solís Guíñez, Secretario.